



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado

Referencia: VERBAL (Rendición provocada de cuentas)
Demandante: IVÁN DARÍO OCAMPO TAMAYO
Demandado: WILFRED DAVID OCAMPO TAMAYO
Decisión: Confirma auto
Radicado: 05001 31 03 012 2019 00009 01
Auto nro.: 090

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR
SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veintitrés de septiembre de dos mil
veintiuno

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia emitida el 24 de enero de 2020 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, mediante la cual se denegó la nulidad formulada dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES:

El señor Iván Darío Ocampo Tamayo promovió proceso verbal de rendición de cuentas en contra de Wilfredo David Ocampo Tamayo. Dentro del trámite el apoderado judicial de la parte demandada instauró incidente de nulidad con base en el artículo 29 de la Constitución Política.

El Juzgado en providencia del 24 de enero de 2020, rechazó de plano la solicitud de nulidad al considerar que la interpuesta no se enmarca dentro de las contempladas en el Art. 133 del C. General del P.

Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

Dicha decisión motivó la interposición del recurso de reposición y en subsidio el de apelación, negándose el primero y concediéndose el segundo. Como fundamento de su disenso sostuvo que la nulidad solicitada hacía referencia al debido proceso la cual ha sido desarrollado jurisprudencialmente; insistió en que el C. General del P. en su artículo 133 del C. General del P. precisa una taxatividad, razón por la cual se exige que se alegue la nulidad por las causales expresamente señaladas por la Ley, no exclusivamente las enumeradas en la citada disposición, pues la norma procesal contiene otras; estimó que discrepa de lo resuelto por la juez de conocimiento, debido a que la causal 5 del artículo citado se ajusta a lo alegado por el recurrente, por lo que no permitirse abrir la etapa procesal que se reclama con el alegato de nulidad vulnera dicha garantía, habiendo lugar a ello, debido a que si bien no se opuso a que el demandante rindiera cuentas de su gestión, si se pidió que los soportes en que se fundara le fuera probada su legitimación y relación con el objeto de la administración, dando por aceptado que el demandado había aceptado las cuentas rendidas, cuando es evidente que no fue así; manifestó que adicional a lo anterior lo decidido va en contra vía de lo señalado en el artículo 138 ejusdem, pues la nulidad se da luego de realizada la audiencia y del saneamiento de que trata el artículo 372 numeral 8º.

Con base en lo anterior solicitó se revoque la decisión atacada y en consecuencia se atienda la nulidad solicitada respecto de las actuaciones posteriores a la sentencia, que llevaron a declarar recibidas las cuentas.

Corrido el traslado a la parte contraria esta se pronunció restándole mérito a los argumentos del demandado, al considerar que lo que

Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

procedía en este caso era la interposición de los recursos en contra de la sentencia; por lo que siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.

De entrada advierte la Sala, de acuerdo con los motivos de disenso, que primero debe auscultarse si las causales invocada se encuentra contenida en la norma procesal de acuerdo a la taxatividad que este tipo de trámites reviste, ya que guarda íntima relación con cuestiones de forma que impiden la procedibilidad de la formulación de la nulidad planteada.

Como es sabido, artículo 133 del Código General del Proceso dispone que:

"El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

- 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.*
- 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.*
- 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.*

Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

Bajo estas premisas, el sistema de nulidades procesales que incorpora el Código en cita está regulado por el régimen de la taxatividad, el cual se cimenta en que no hay nulidad procesal sin norma que la consagre expresamente, lo cual se traduce en que el Juez no puede recurrir a la analogía para establecer vicios de nulidad, ni extender ésta a defectos diferentes a los específicamente contemplados como tales en la ley. Además, se establece en el artículo 134 de la norma en cita dispone que: “Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella”.

Se tiene que, que la nulidad alegada es la contenida en el artículo 29 de la Constitución Política el cual dispone en su inciso final que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido

Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

contra el proceso, principio que es aplicable en materia de nulidades procesales según la doctrina jurisprudencial decantada de la Corte Constitucional¹, donde precisa que al lado de las nulidades de naturaleza legal, se erige como motivo constitutivo de anulación supralegal, aquél que subyace a la obtención de los medios de convicción probatorios, cuando se desconocen las formalidades propias requeridas para ello.

Ahora, la mencionada nulidad constitucional toca sólo con la prueba irregularmente obtenida, esto es sin observar las disposiciones que regulan su producción, mandato que entonces se cumpliría no tomando en cuenta para la decisión el medio probatorio ilícito (artículo 168 C.P.C.), obvio resulta que si contrariando ésta última disposición, la decisión tiene como soporte la prueba de tal manera obtenida, su nulidad afecta el acto procesal de decisión y, lógicamente, la actuación posterior que de allí se derive.

Para el caso que convoca la atención de la Sala se tiene que la causal aducida en este caso no se fundamenta en una prueba ilegalmente obtenida y analizada en la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019, pues fue allí donde se decidió lo concerniente a la rendición espontánea de cuentas y en donde consideró la juez que el demandado había aceptado las presentadas por el demandante, cosa que a juicio del recurrente no ocurrió, lo que no se constituye en una causal de nulidad por violación al debido proceso, pues allí se realizó en saneamiento del proceso acorde con el artículo 372 del C. General del P. sin que las partes alegaran la misma.

¹ Consultar sentencias de Constitucionalidad 491 de 1995, 217 de 1996 y 150 de 1993.

Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

De manera que la causal alegada, acorde con lo establecido en el inciso 4º del Art. 135 del C. General del P. debe ser rechazada de plano, pues, en principio la contenido en el artículo 29 de la Constitución Política solo se da por la prueba ilegalmente obtenida; y en todo caso la parte que la alegó actuó sin proponerla después de saneada.

Colofón de lo expuesto, no es el incidente de nulidad el mecanismo idóneo para atacar las inconformidades planteadas, pues como se dijo las pruebas aportadas no fueron controvertidas y la nulidad fue saneada por la parte demandada, debiendo esta Sala CONFIRMAR en su integridad el auto atacado.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de ésta providencia.



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

SEGUNDO: Sin CONDENA en costa.

TERCERO. Para los efectos del inciso segundo del artículo 326 del C. General del P., se ordena comunicar lo decidido.

NOTIFÍQUESE

(Firma scaneada conforme al Art. 11 del Decreto 491 del 28 de
Marzo de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado